

Informe sobre las tasas y precios portuarios

! CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Tasas y precios públicos

La distinción entre precio público y tasa es una cuestión clásica de la Hacienda Pública, que ha sido minimizada jurídicamente por la escasa significación de los ingresos procedentes del precio en el conjunto de los ingresos públicos. Sin embargo, tanto la tasa como el precio público arrancan de un mismo supuesto de hecho como es el que un Ente público --en este caso la Autoridad Portuaria-- entrega directamente ciertos bienes o presta ciertos servicios por los que es posible obtener a cambio un ingreso. En ambos casos tendremos ingresos públicos, pero mientras que en el precio público la relación que se establece es contractual o voluntaria para quien lo paga, aunque sometida a una regulación de Derecho público, en la tasa aparece la nota de coactividad propia de los tributos y, consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional de legalidad para su creación y aplicación que se deriva del artículo 31,3 de la Constitución tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional ^{1 2}.

¹ El art. 31.3 de la Constitución dispone que sólo se podrán establecer prestaciones personales o patrimoniales de carácter público de acuerdo con la Ley.

² La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, interpretando el art. 31.3 de la Constitución, estableció que la imposición coactiva de la prestación patrimonial o, lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla es, pues, en última instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley; por ello, bien puede concluirse que la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público. En lo que ahora importa, el problema de la determinación del alcance del concepto de prestación patrimonial de carácter público se centra, pues, en precisar cuándo puede considerarse que una prestación patrimonial resulta coactivamente impuesta (F.J. 3); añadiendo que estaremos en presencia de prestaciones coactivamente impuestas cuando la realización del supuesto de hecho resulta de una obligación impuesta al particular por el Ente público --por ejemplo, cuando surge de la prestación de servicios o actividades de solicitud o recepción obligatoria-- y también cuando, siendo libre la realización del supuesto de hecho, éste no consiste en la demanda de un bien, un servicio o una actuación de los Entes públicos, sino que la obligación de pagar la prestación nace sin que exista actividad voluntaria del contribuyente dirigida al Ente público, encaminada por ello mismo, siquiera sea mediatamente, a producir el nacimiento de la obligación (F.J. 3); y, que también deben considerarse coactivamente impuestas las prestaciones pecuniarias que derivan de la utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas por los entes públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho. Aunque el nivel de coactividad que deriva del monopolio público sea ciertamente menor que el que resulta del carácter imprescindible de los bienes, servicios y actividades que generan la prestación, no por ello puede considerarse irrelevante, ni subsumirse en este requisito, pues, aunque los servicios o las actividades no sean obligatorias, ni imprescindibles, lo cierto es que si sólo son los Entes públicos quienes los prestan, los particulares se ven obligados a optar entre no recibirlos o constituir necesariamente la obligación de pago de la prestación. La libertad de contratar o no contratar, la posibilidad de abstenerse de utilizar el bien, el servicio o la actividad no es a estos efectos una libertad real y efectiva (F.J. 3).

Exigencias constitucionales que también habrá que respetar para los ingresos derivados de cualquier servicio o actividad prestados por un Ente público en posición de monopolio de hecho o de derecho, aunque no se califiquen con el nombre de tasa.

Finalmente, sólo resta añadir aquí que el régimen constitucional aplicable a los precios públicos --no sujeción al rígido principio de legalidad establecido para las tasas-- rige también cuando la contraprestación por el servicio o actividad prestada por los Entes públicos quede sometida al Derecho privado, caso en el que la expresada contraprestación suele conocerse con el nombre de precio privado.

2.- Concepto de tasa

Las tasas están definidas por el artículo 6º de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos (en adelante LTPP), en la redacción dada por la Ley 52/2003, de 17 de diciembre, siguiendo las pautas de la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 diciembre, en los siguientes términos:

“Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado”.

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de Derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un Ente público (artículo 2,2 a) de la Ley General Tributaria)³.

Se considera que un servicio o actividad no es de solicitud o recepción voluntaria cuando venga impuesto por disposiciones legales y constituya condición previa para realizar cualquier actividad u obtener derechos o efectos jurídicos determinados, es decir, cuando sea imprescindible. Para poner un ejemplo relacionado con la actividad portuaria diremos que no es una actividad de solicitud o recepción voluntaria la utilización por las mercancías que se embarquen, desembarquen, transborden o efectúen tránsito marítimo o terrestre, de las instalaciones de atraque, zonas de usos comerciales asociados a la carga y descarga de los buques, accesos y vías de circulación terrestres

³ Las referencias a la Ley General Tributaria lo son al texto aprobado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que entrará en vigor el 1 de julio de 2004.

viarios y ferroviarios y otras instalaciones portuarias fijas, toda vez que o se produce dicha utilización o se hace imposible el transporte marítimo de mercancías.

Y por tributo --que es un concepto más general y amplio que el de impuesto o tasa y que comprende a ambos-- se entienden los ingresos que el Estado u otras Entidades públicas obtienen en uso del poder financiero que les atribuye la Constitución y las leyes sobre los obligados coactivamente a satisfacerlos.

Debiendo significarse que después de la entrada en vigor de la LREPSPIG, en ningún caso puede darse la denominación de tarifas a las tasas portuarias, ya que la expresada denominación de tarifa se reserva o se hace sinónima en dicha Ley a los precios privados que las Autoridades Portuarias pueden percibir por la prestación de servicios comerciales en concurrencia con otros prestadores privados y sujetos al Derecho privado, a los que en breve nos referiremos.

3.-- Concepto de precio público

Los precios públicos se definen en el artículo 24 de la LTPP, en la redacción dada por la Ley 25/1998, 13 de julio, como sigue:

"Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados".

La diferencia entre precios públicos y tasas no estriba en su régimen jurídico --de naturaleza pública en ambos casos--, sino en que los primeros, a diferencia de las segundas, se perciben con carácter no coactivo, o sea por servicios o actividades que no son imprescindibles, y en concurrencia con el sector privado⁴.

4.- Concepto de precio privado

Los precios privados no son objeto de definición legal, pero a la vista de lo que se indica para los precios públicos cabe afirmar que cuando el régimen aplicable a la contraprestación por el servicio o actividad de que se trate no sea de Derecho público sino de Derecho privado, concurriendo además las circunstancias expresadas en el apartado anterior para los precios públicos

⁴ Tampoco han de confundirse los precios públicos con las "prestaciones patrimoniales de carácter público" a que se refiere el artículo 31,3 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 25 de 14 diciembre. Las "prestaciones patrimoniales de carácter público" son siempre pagos obtenidos de forma no voluntaria o coactiva, mientras que la voluntariedad en el pago es una de las características más importantes de los precios públicos. Además, hay que decir que el concepto de "prestación patrimonial de carácter público" es incluso más amplio que el de "tributo", ya que no sólo comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, sino cualquier otra clase de gravámenes o pagos obtenidos por un Ente público de los particulares de forma coactiva o no voluntaria, incluyendo en este último supuesto la coactividad que deriva de los monopolios públicos de hecho o de derecho.

(solicitud voluntaria y prestaciones en régimen de concurrencia con el sector privado), se estará en presencia de un precio privado.

De ahí que en este caso, por contraste con el anterior, la sujeción del ingreso o precio al Derecho público o al Derecho privado se convierta en el elemento diferencial entre los precios privados y los precios públicos.

5.- Principio de legalidad

El principio de legalidad que, como ya hemos señalado, sólo juega en relación a las tasas pero no respecto a los precios públicos y a los privados, no excluye sin embargo que algún aspecto de la relación jurídico-tributaria pueda ser regulado por normas infralegales (reales decretos, ordenes ministeriales y hasta instrucciones). Esta colaboración puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de las cuantías --estrechamente relacionadas con los costes concretos de los diversos servicios y/o actividades-- y de otros elementos de la prestación dependientes de las específicas circunstancias de los distintos tipos de servicios y/o actividades⁵. En cambio, la sumisión al principio de legalidad es muy estricta cuando se trata de la creación “ex novo” de las prestaciones o servicios, ya que en este ámbito la posibilidad de intervención reglamentaria resulta sumamente reducida, puesto que sólo el legislador posee la facultad de determinar libremente cuáles son los hechos imposables, es decir los supuestos de hecho a los que se ligará la generación o devengo de la prestación pecuniaria, y qué figura jurídico-tributaria prefiere aplicar en cada caso (impuesto, tasa, arancel, contribución especial, etc.).

6.- Gestión, liquidación y recaudación de las tasas

La gestión, liquidación y recaudación de las tasas se ha de efectuar con arreglo a lo dispuesto en las leyes reguladoras de cada tasa⁶ y, además, por tratarse las tasas de tributos se tendrán que aplicar igualmente los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria y, en particular, las normas reguladoras de las liquidaciones tributarias, la recaudación, la inspección y la revisión de los actos en vía administrativa (artículo 22 de la LTPP).

En este sentido es sumamente ilustrativo el artículo 18 de la LREPSPIG cuando prescribe que:

⁵ Un ejemplo muy claro de lo que se dice en el texto lo constituyen, entre otros, el apartado 4 del artículo 29, de la LREPSPIG, relativo a la tasa por servicios generales.

⁶ La exigencia de que la gestión y liquidación de las tasas haya de efectuarse de acuerdo con las leyes reguladoras de cada una no hay duda que deriva del principio de legalidad a que las mismas se hallan sujetas de acuerdo con el artículo 31,3 de la Constitución y la sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional, antes citada.

"1. La gestión, liquidación y recaudación de las tasas se efectuará por las Autoridades Portuarias, pudiendo utilizar para la efectividad del cobro de las mismas las garantías constituidas al efecto y, en su caso, la vía de apremio cuya gestión se realizará por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o previa celebración del oportuno convenio de la gestión recaudatoria, por los órganos de recaudación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las entidades que integran la Administración local o de otras robo públicas territoriales.

De conformidad con el artículo 23 de la LTPP, los sujetos pasivos estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria cuando así se prevea reglamentariamente.

2. En la gestión y revisión de los actos se aplicarán los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria y disposiciones de desarrollo en cuanto no se opongan a lo previsto en esta Ley.

3. El impago de cualquiera de las tasas previstas en el artículo 14,2 (al que más adelante nos referiremos) podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la autorización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período voluntario".

7.- Administración y cobro de los precios públicos

La administración y cobro de los precios públicos difiere sustancialmente de lo que se acaba de exponer en relación a las tasas, salvo en la posibilidad de hacerlos efectivos mediante dinero o efectos timbrados y en la de acudir al procedimiento administrativo de apremio. En lo demás, habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 de la LTPP que en lo esencial establece que podrá exigirse la anticipación o depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos y que cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste el servicio o no se realice la actividad, procederá la devolución del importe que corresponda o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera posible; supuestos, todos ellos, no obstante, de difícil y compleja puesta en práctica.

8.- Administración y cobro de los precios privados

En cuanto a la administración y cobro de los precios privados nada se dice, como es obvio, en la LTPP, ya que ésta sólo trata de los precios públicos, teniéndose por tanto que regir por lo que sobre el particular se disponga en la normativa que autorice a los Entes públicos a percibirlos. En nuestro caso, y por lo que hace a los precios privados por servicios prestados por las Autoridades

Portuarias,⁷ su régimen de percepción y exigibilidad se contempla en los artículos 32 al 35 de la LREPSPIG, el cual presenta las siguientes características:

a) Se habrán de hacer efectivos a los veinte días naturales desde la fecha de notificación de las correspondientes facturas;

b) Una vez transcurrido el plazo de pago sin que la deuda haya sido satisfecha, la Autoridad Portuaria certificará por medio del Director dichas circunstancias y lo notificará al obligado al pago, teniendo dicho certificado la consideración de título ejecutivo a efectos de la acción ejecutiva conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil;

c) La cantidad adeudada devengará el interés legal del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante el periodo en que se haya incurrido en mora, si bien el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá graduar el devengo de intereses y dispensar su exigencia;

d) El impago reiterado del servicio prestado faculta a la Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a este, manteniéndose la suspensión en tanto no se efectúe el pago o se garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión;

e) La Autoridad Portuaria podrá exigir un depósito previo a la constitución de avales, así como emitir facturas a cuenta, con el objeto de garantizar el cobro del importe de las tarifas por los servicios comerciales que les sean solicitados, sin perjuicio del importe final resultante;

f) Contra las liquidaciones de tarifas por servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias procederá a la reclamación previa al ejercicio de acciones civiles que deberá interponerse ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de que se trate. La interposición de dicha reclamación previa no suspenderá, sin embargo, la obligación de efectuar el pago de las facturas en el plazo legalmente establecido;

⁷ La decisión de denominar a estos precios "tarifas" que se adopta en la LREPSPIG no puede considerarse acertada debido a las posibles confusiones que puede generar, dado que en nuestro país, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, era muy corriente denominar tarifas a lo que en realidad eran tasas, como por ejemplo la conocida "Tarifa T-3" .

g) La acción para exigir el pago de las tarifas por servicios prestados a directamente por las Autoridades Portuarias prescribe a los cinco años a contar desde la prestación del servicio de que se trate^{8 9}.

9.- Responsabilidades ligadas al cobro o percepción de las tasas y de los precios públicos y privados

Una consecuencia derivada del principio de legalidad en la fijación y determinación de los elementos esenciales de las tasas, así como del régimen jurídico-público de los precios públicos, radica en las responsabilidades que van ligadas a su cobro o percepción. En concreto, el artículo 4 de la LTPP señala que las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o asimilados que de forma voluntaria y culpable exijan indebidamente una tasa o precio público, o lo hagan en cuantía mayor a la establecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación. Estas otras responsabilidades, diferentes de las disciplinarias y de índole penal¹⁰, son las que también podrían alcanzar a quienes en calidad de sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes¹¹ repercutan el importe de las tasas portuarias en mayor cuantía de la que legalmente corresponda. Responsabilidades que, igualmente y por su propia índole, podrían ser asimismo exigibles tratándose de la repercusión de tarifas o precios privados.

II

Tasas y precios portuarios

1.- Tasas

De acuerdo con la normativa y doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente citadas, la LREPSPIG crea y regula, en el Capítulo IV de su Título II (artículos 14 al 30), las que denomina

⁸ El plazo de prescripción de cinco años para las tarifas o precios privados diferencia a estos de las tasas cuyo plazo de prescripción es el general para los tributos de cuatro años previsto por el artículo 66 de la Ley General Tributaria.

⁹ La circunstancia de que las reclamaciones en materia de tarifas o precios privados hayan de ventilarse ante la jurisdicción civil y no ante la contencioso-administrativa, como es obligado para las tasas, es otra de las diferencias capitales que se dan entre las tasas y los precios privados.

¹⁰ Artículos 437 y 390 y ss. del Código Penal, relativos a las exacciones ilegales y a la falsificación de documentos públicos, para los funcionarios públicos, agentes o asimilados, y artículos 248 y 395 del mismo Cuerpo legal, referentes a las estafas y a la falsificación de documentos mercantiles, para los no funcionarios.

¹¹ Para las mercancías que se embarquen, desembarquen, transborden o se encuentren en régimen de tránsito marítimo, serán sujetos pasivos contribuyentes por la tasa de la mercancía con carácter solidario el naviero, el propietario de la mercancía y el capitán del buque. Cuando el buque y la mercancía se encuentren consignados, serán sujetos pasivos sustitutos el consignatario del buque y el consignatario, transitario u operador logístico representante de la mercancía. En terminales y otras instalaciones de manipulación de mercancías otorgadas en concesión o autorización conjuntamente con el atraque, el concesionario o autorizado será el sujeto pasivo sustituto. Y para las mercancías que efectúen tránsito terrestre o que accedan o salgan de la zona de servicio del puerto sin utilizar la vía marítima, será sujeto pasivo contribuyente al propietario de la mercancía o, cuando lo hubiere, el transitario u operador logístico que represente la mercancía (artículo 24,2 de la REPSPIG).

tasas portuarias, distinguiendo las tasas exigidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público portuario y las derivadas de la prestación de servicios no comerciales por las Autoridades Portuarias.

Las primeras son:

- a) Tasas por ocupación privativa del dominio público portuario;
- b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias (entre estas tasas se encuentra la denominada “tasa de la mercancía” que ha sustituido a la antigua Tarifa T-3);
- c) Tasas por aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios por personas o entidades privadas.

Y las segundas, o sea las devengadas por la prestación de servicios no comerciales por las autoridades portuarias, son:

- a) Tasa por servicios generales;
- b) Tasa por servicio de señalización marítima.

El marco normativo en el que se desenvuelven las anteriores tasas está constituido, en primer lugar, por la LREPSPIG, y en lo no previsto en la misma por la LTPP y la Ley General Tributaria; añadiéndose que en aquellos aspectos a que antes nos hemos referido en que puede ser especialmente intenso el papel de las normas infralegales, también integrarán dicho marco las normas reglamentarias que se dicten en desarrollo de las legales antes citadas. Entre estas normas reglamentarias hay que mencionar la reciente Orden 818/2004, de 24 de marzo, del Ministerio de Fomento, de definición de conceptos, condiciones, escalas y criterios para la aplicación de las tasas portuarias y sus bonificaciones de acuerdo con lo previsto en la LREPSPIG.

En lo relativo a las reglas generales que incorpora la LREPSPIG para esta clase de tributos se establece la necesidad de que el importe de las tasas responda al objetivo de coordinar el sistema de transportes de interés general, así como el principio de autosuficiencia del sistema portuario, de forma que se cubran los gastos ordinarios de cada puerto y se le asegure una rentabilidad suficiente para hacer frente a las inversiones futuras y a la devolución de las deudas; significándose que la cuantía de las tasas por servicios no comerciales no puede exceder, en su conjunto, del coste de los servicios o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

En la regulación de las tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias, entre las que se encuentra la denominada tasa de la mercancía (artículo 24), se han previsto algunas medidas dirigidas a incrementar la competitividad entre los puertos españoles y entre éstos y los restantes del mercado internacional. Así, aunque se parte de una regulación muy rígida, se introducen medidas flexibilizadoras consistentes en la regulación de unos coeficientes correctores (artículo 26) y unas bonificaciones (artículo 27). Los coeficientes correctores permiten disminuir el importe de las tasas en aquellos puertos que presenten una mejor media de rentabilidad, así como a incrementarlo en aquellos otros cuya situación sea la opuesta. Por su parte, las bonificaciones responden a los seis tipos de objetivos siguientes: potenciar el papel de España como plataforma logística internacional; potenciar la intermodalidad; potenciar la consolidación de tráfico; toma en consideración de circunstancias de alejamiento e insularidad; e incentivación de mejores prácticas medioambientales tanto a la entrada y salida de los buques como en la manipulación de las mercancías. Como ya se ha dicho, la Orden 818/2004, 24 de marzo, del Ministerio de Fomento, antes citada, ha establecido las condiciones para la aplicación de bonificaciones en las tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias teniendo en cuenta los diversos objetivos que se acaban de mencionar.

2.- Precios públicos

En la LREPSPIG no se ha previsto la existencia de precios públicos en relación con las actividades y servicios portuarios. Es más, incluso en aquellos casos en que por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada las Autoridades Portuarias se vean precisadas a asumir la prestación de los llamados servicios portuarios básicos¹², supuesto en el que tal vez se podía haber recurrido a un sistema de precios públicos¹³, la propia LREPSPIG se cuida de aclarar que las contraprestaciones a percibir por dichos servicios se someterán al mismo régimen jurídico que los precios privados por servicios comerciales prestados por aquellas Autoridades (artículo 60,4).

3.- Precios privados

En el Capítulo V de la expresada Ley se establecen los que se denominan precios privados o tarifas, que ni son tasas ni precios públicos, en la medida en que se trata de actividades efectuadas

¹² Los servicios básicos de conformidad con el artículo 60,2 de la LREPSPIG son: practica; servicios técnico-náuticos; remolque portuario; amarre y desamarre de buques; servicios de pasaje (embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje); servicios de manipulación y transporte de mercancías (carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías, depósito y transporte horizontal); y servicios de recepción de desechos generados por buques (recepción de desechos sólidos y recepción de desechos líquidos).

¹³ Apurando el razonamiento incluso podría sostenerse que ni tan siquiera un régimen de precios públicos sería el más apropiado en el caso de ausencia de la iniciativa privada, toda vez que la situación de monopolio público de hecho que indudablemente comporta esta situación obligaría a plantearse si en realidad no se está ante una de aquellas "prestaciones patrimoniales de carácter público" a que se refiere el artículo 31,3 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, dado el nivel de coactividad que deriva de las situaciones de monopolio público.

en régimen de Derecho privado aunque venga regulada por una norma de naturalezas administrativa --la LREPSPIG-- la posibilidad de su percepción. Se tratan, en definitiva, de precios correspondientes a servicios que, no siendo obligatorios, sino puramente comerciales, se prestan en régimen de concurrencia con el sector privado y sometidos al Derecho privado¹⁴.

Como consecuencia de esa naturaleza privada, en caso de desacuerdo sobre su aplicación y previa reclamación a interponer ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de que se trate, su posterior impugnación deberá ser planteada, como antes ya se ha indicado, ante la jurisdicción civil, de conformidad con lo que se prescribe en el artículo 35 de la tan mencionada LREPSPIG, a diferencia de las reclamaciones relativas a las tasas de las que deberá conocer, como igualmente ya se ha dicho con anterioridad, la jurisdicción contencioso-administrativa, previa la correspondiente reclamación económico-administrativa, precedida o no del potestativo recurso de reposición (artículos 222 y siguientes de la Ley General Tributaria).

Barcelona, a 12 de mayo de 2004

Manuel M. Vicens Matas

Secretario y Asesor Jurídico

¹⁴ Los servicios comerciales son las actividades de prestación portuarias o no portuarias de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de servicios portuarios, estén permitidas en el dominio público portuario. Estos servicios sólo podrán ser prestados por las Autoridades Portuarias cuando se refieran a actividades directamente relacionadas con la actividad portuaria que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y, además, para atender a las posibles deficiencias de la iniciativa privada (artículos 88,1 y 90 de la LREPSPIG).